



SALA QUINTA DE DECISIÓN LABORAL

Proceso: ORDINARIO LABORAL
Radicado: 05001-31-05-021-2019-00295-01 (O2-23-079)
Accionante: ERNESTO DE JESÚS MUÑOZ SARMIENTO
Accionadas: JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DE ANTIOQUIA,
JUNTA NACIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ y AFP
PORVENIR S.A.
Llamada en Garantía: MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A.
Procedencia: JUZGADO VEINTIUNO LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN
Providencia: SENTENCIA No. 169
Asunto: NULIDAD DICTAMEN - PENSIÓN DE INVALIDEZ

En Medellín, a los veintitrés (23) días del mes de octubre del año dos mil veintitrés (2023), la **Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín**, integrada por los magistrados CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES, SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE y VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO, quien actúa como Magistrado Sustanciador, procede a dictar sentencia de segundo grado, dentro del proceso ORDINARIO LABORAL conocido bajo el radicado único nacional 05001-31-05-021-2019-00295-01 (O2-23-079), instaurado por ERNESTO DE JESÚS MUÑOZ SARMIENTO en contra de la JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DE ANTIOQUIA, la JUNTA NACIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ y AFP PORVENIR S.A., en donde fue llamada en garantía la sociedad MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A., con el fin de resolver el Recurso de Apelación impetrado por ERNESTO DE JESÚS MUÑOZ SARMIENTO contra la sentencia que selló la primera instancia, proferida el 21 de marzo de 2023 por el Juzgado Veintiuno Laboral del Circuito de Medellín.

De conformidad con lo previsto en el numeral 1º del artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, “[p]or medio de la cual se establece la vigencia permanente del Decreto Legislativo 806 de 2020, y se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia y se dictan otras disposiciones”, se adopta la decisión correspondiente mediante la presente providencia escrita, cuya ponencia fue previamente discutida y aprobada por los integrantes de la Sala.

1. ANTECEDENTES

El señor ERNESTO DE JESÚS MUÑOZ SARMIENTO, actuando a través de gestora judicial, promovió demanda ordinaria laboral en contra de la JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DE ANTIOQUIA - JRCIA, JUNTA NACIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ – JNCI y la AFP PORVENIR S.A., en procura de que se declare la nulidad de los dictámenes nros. 62811 del 28-dic-2016 y 70076548-10082 del 23-agos-2017 emitidos en su orden, por la JRCIA y la JNCI; en consecuencia, obtener el reconocimiento de la pensión de invalidez de origen común a partir de la fecha de estructuración que se determine y a cargo de la AFP PORVENIR S.A. De igual manera, reclama el pago de los intereses de mora de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 sobre las mesadas pensionales adeudadas y la indexación.

En respaldo de sus aspiraciones, sostiene que se afilió al RAIS administrado por la AFP PORVENIR S.A. a partir del 12-mar-2002, entidad que, a través de la sociedad Seguros de Vida Alfa S.A., le otorgó mediante dictamen nro. 2848955 una PCL del 21,98% y fijó como fecha de estructuración del estado de invalidez el 28-jun-2016. Acota que presentó impugnación ante la JRCIA y la JNCI, organismos calificadores que, por una parte, mantuvieron la fecha de estructuración fijada por la administradora del RAIS, a la par de que, establecieron la PCL en un 56,04%.

Considera que, para la elaboración de los dictámenes de PCL cuestionados no se tuvo en cuenta la historia clínica del demandante, ni el concepto de rehabilitación desfavorable del 17-oct-2014, expedido por el médico Fabio Alberto Henao Acevedo donde se dejó constancia de: “[p]aciente en programa de riesgo cardiovascular, [h]ipertenso, [d]iabético y [e]piléptico”; informando además que, el actor sufrió dos accidentes de trabajo cuyas secuelas fueron calificadas por la ARL, la JRCIA y la JNCI, circunstancias todas que no fueron tenidas en cuenta para el momento de la última valoración.

1.1. Trámite de primera instancia

La demanda se admitió el 02 de julio de 2019 (doc.06, carp.01), y se notificó a las demandadas JRCIA y JNCI el 13 de agosto de 2019 y el 27 de abril de 2021 (docs.08 y 21, carp.01); a la AFP PORVENIR S.A. el 24 de octubre de 2019 (doc.12, carp.01).

Las juntas calificadoras aceptaron como ciertos los hechos atinentes a los resultados de la valoración a la que fue sometido el deprecante, manifestando no ser ciertos o no constarle los demás. Plantearon al unísono oposición a las reclamaciones impetradas en su contra, presentando como excepciones de mérito las que denominaron como inexistencia de fundamentos de hecho y de derecho de las pretensiones, competencia como calificador de

segunda instancia, fundamentación médica de la fecha de estructuración, inexistencia de obligación a cargo de la junta nacional, buena fe de la parte demandada y la genérica (docs.09 y 22, carp.01).

La administradora del RAIS (doc.13, carp.01) luego de tener por cierta la afiliación del actor, junto con el contenido de los dictámenes emitidos por las entidades competentes, se opuso a la prosperidad de las súplicas de la demanda con la formulación de las excepciones perentorias de falta de causa para pedir, inexistencia de las obligaciones demandadas, buena fe, prescripción, afectación del sostenimiento financiero del sistema general de pensiones, no causación de intereses de mora, compensación y la innominada. Asimismo, llamó en garantía a la sociedad MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A., misma que postuló los medios defensivos de inexistencia de los requisitos para acceder a la pensión de invalidez, existencia de dictamen que excluye de responsabilidad a la compañía, ausencia de *causa petendi*, cobro de lo no debido por parte de la demandante, buena fe, prescripción, cláusulas que rigen el contrato de seguro, ausencia de requisitos para afectar la póliza y no cobertura para cambios jurisprudenciales (doc.20, carp.01).

1.2. Decisión de Primera Instancia

La controversia planteada se dirimió en primera instancia el 21 de marzo de 2023 (docs.59 y 61, carp.01), mediante sentencia proferida por el Juzgado Veintiuno Laboral del Circuito de Medellín, en la que dispuso absolver a las codemandadas y a la sociedad aseguradora llamada en garantía de los pedimentos formulados por el señor ERNESTO DE JESÚS MUÑOZ SARMIENTO, absteniéndose de condenarlo en costas.

Para sustentar su decisión, el cognoscente de primer asentó que la fecha de estructuración del estado de invalidez se determina con la calificación de las secuelas de las patologías que padece el paciente de cara a la información que reposa en la historia clínica y en los exámenes diagnósticos. Luego entonces, la fecha de estructuración del estado de invalidez del promotor se fijó con el diagnóstico expedido por la especialidad de cardiología el 28 de junio de 2016 y no en la data en que fue extendido el concepto médico de rehabilitación (minuto 00:06 a 25:34, doc.61, carp.01).

1.3. Recurso de Apelación

La poderhabiente del señor ERNESTO DE JESÚS MUÑOZ SARMIENTO inconforme con la decisión interpuso recurso de apelación, a fin de que se revoque la decisión adoptada en la primera instancia, para en su lugar, se conceda lo pretendido en el libelo genitor. Para los

anteriores propósitos, adujo la opugnante que el concepto médico de rehabilitación del 17 de octubre de 2014 muestra unas patologías que arrojan una PCL relevante, lo que a su juicio se corrobora con la falta de cotizaciones al SGSSP posterior al 02 de noviembre de 2013. Tras esa consideración aseguró que, el señor MUÑOZ SARMIENTO perdió su capacidad laboral, incluso a partir del 02 de noviembre de 2013, invocando el principio de la realidad sobre las formas y la literatura médica general de acceso al público (minuto 00:10 a 02:40, doc.62, carp.01).

1.4. Trámite de Segunda Instancia

El recurso de apelación se admitió el 27 de marzo de 2023 (doc.02, carp.02), y mediante proveído del día 10 de abril de la misma anualidad (doc.03, carp.02) se corrió traslado a las partes para que, de conformidad con lo previsto en el numeral 1º del artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, presentaran los alegatos de conclusión por escrito, de así estimarlo.

La gestora judicial de la AFP PORVENIR S.A. (doc.04, carp.02), solicitó se mantuviera incólume la decisión adoptada por el juzgado de primer grado, puesto que, a su juicio, el actor no cumple con el requisito de densidad mínima de semanas cotizadas para ser acreedor a la prestación pensional de invalidez. Sumó a lo anterior, que *“los argumentos de la parte actora para que se acceda a la modificación de la fecha de estructuración, no hacen eco al procedimiento fijado por el MUCILO(sic) para la fijación de dicha de estructuración”*.

La censura plantea que la sentencia dictada por el juzgador de primer grado debe ser revocada en su integridad, en la medida en que, la real fecha de estructuración del estado de invalidez del señor MUÑOZ SARMIENTO corresponde al 02 de noviembre de 2013, o bien al 17 de octubre de 2014, momento en el que dejó de cotizar y fue expedido el concepto médico de rehabilitación desfavorable, respectivamente. En la demostración sostiene que *“[s]i se verifican las calendas octubre 17 de 2014 a noviembre 02 de 2013, es clara la cercanía de estas, para indicar que previa a la emisión del concepto de rehabilitación del concepto de rehabilitación referido, ya el demandante había agotado la disposición y capacidad que tenía para laborar, y por ello, finalizó su despliegue como trabajador activo”*

Ulteriormente, la sociedad llamada en garantía solicita se confirme la sentencia confutada bajo los argumentos que denominó *i. Falta de cumplimiento de requisitos para acceder a la pensión de invalidez, ii. Inexistencia del contrato y/o configuración del evento (“sinistro”) por fuera de la vigencia de la póliza y iii. Improcedencia de intereses moratorios* (doc.06, carp.01).

2. ANÁLISIS DE LA SALA

Surtido el trámite en esta instancia, sin observar causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por ERNESTO DE JESÚS MUÑOZ SARMIENTO, advirtiéndose que, de conformidad con el principio de consonancia consagrado en el artículo 66A del CPTSS, el estudio de la sentencia impugnada se focalizará en los puntos de inconformidad materia de alzada.

2.1. Problema jurídico

El *thema decidendi* en el asunto puesto a consideración de la Sala se contrae a establecer si al señor ERNESTO DE JESÚS MUÑOZ SARMIENTO le asiste el derecho al reconocimiento de la pensión de invalidez de origen común, efecto para el que será necesario determinar en el asunto puesto a consideración de la judicatura, la validez y eficacia de los dictámenes de PCL emitidos por la JRCIA y la JNCI, conforme a los principios que informan la sana crítica. Asimismo, la Sala fincará su análisis en establecer si concurren los requisitos legales para que el afiliado cause y entre al disfrute de la referida prestación, con arreglo a las premisas normativas y criterios jurisprudenciales que rigen la materia.

2.2. Sentido del Fallo – Tesis de la Sala

La Sala confirmará íntegramente la decisión de primer grado, considerando que como colofón del ejercicio ponderativo entre la prueba pericial practicado en el tracto procesal y los demás medios suasorios incorporados y practicados en sede judicial, deben mantenerse incólumes los dictámenes de PCL emanados de la JRCIA y la JNCI, como quiera que, adiar la fecha de estructuración del estado de invalidez al momento de la expedición del concepto médico rehabilitación desfavorable o para data de la última cotización al SGSSP, no responde a los lineamientos versados en el Manual Único para la Calificación de la Invalidez - MUCI que se encontraba vigente para la época de la evaluación. Aparejado lo anterior, conque el actor no demostró con suficiencia la pérdida real de su capacidad laboral residual para una calenda diferente a la determinada por los organismos calificadores, a fin de determinar con certeza el derecho a la pensión de invalidez a la que aspiraba.

2.3. Solución del Problema Jurídico Planteado

La carga de la prueba es un principio de derecho procesal, encaminado a establecer a cuál de los sujetos del proceso le concierne la aportación de las pruebas, y cuáles son las consecuencias jurídicas que se derivan del incumplimiento de dicha carga; en su criterio clásico la carga de probar se ha fijado en cabeza de quien afirma los hechos que fundamentan

la procedencia del reconocimiento de los derechos debatidos, correspondiéndole al mismo, probar sus aserciones para que el juzgador establezca si es procedente el reconocimiento de los derechos que reclama, debiéndose desestimar sus pretensiones en caso de que los hechos no aparezcan probados en el proceso.

El concepto prístino de la carga probatoria se compendia en el aforismo romano *ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat*, según el cual, quien afirma un hecho debe probarlo, y quien lo niega, está libre de la carga de probar, regla procesal que guarda concordancia con las previsiones contenidas en el artículo 167 del CGP, aplicable por remisión analógica a los juicios del trabajo y de la seguridad social, en los términos previstos en el artículo 145 del CPTSS, y por cuya virtud, le incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.

Previo a dirimir la litis planteada, se advierte que no son objeto de discusión los siguientes supuestos fácticos: que el pretensor cotizó para los riesgos de IVM al RAIS a partir del 12-03-2002 (pág.1, doc.14, carp.01); que desde su afiliación al RAIS al 30-11-2013 alcanzó a acumular 492 semanas (págs.09 a 10, doc.03, carp.01); que la sociedad Seguros de Vida Alfa el 01-08-2016 calificó la PCL del actor en un 21,98%, tomando como fecha de estructuración el 28-06-2016 y determinando su origen como común (págs.11 a 15, doc.03, carp.01; págs.18 a 21, doc.14, carp.01), y que la JRCIA y la JNCI mantuvieron la fecha de estructuración indicada por Seguros de Vida Alfa S.A., señalando que la PCL correspondía 56,04% (págs.40 a 46 y 57 a 60, doc.03, carp.01).

2.3.1. La calificación de la pérdida de capacidad laboral

En lo que respecta a este tópico, conviene colacionar el contenido del artículo 142 del Decreto 019 de 2012, y del artículo 41 de la Ley 100 de 1993, el cual reza que *[c]orresponde al Instituto de Seguros Sociales, Administradora Colombiana de Pensiones -COLPENSIONES-, a las Administradoras de Riesgos [Laborales] – AR[L]-, a las Compañías de Seguros que asuman el riesgo de invalidez y muerte, y a las Entidades Promotoras de Salud EPS, determinar en una primera oportunidad la pérdida de capacidad laboral y calificar el grado de invalidez y el origen de estas contingencias; pudiéndose acudir a las juntas regionales de calificación de invalidez y a la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, en el evento en que uno de los interesados, vale decir, la persona calificada o sus beneficiarios en caso de muerte, la Entidad Promotora de Salud, la Administradora de Riesgos Laborales, la Administradora del Fondo de Pensiones o Administradora de Régimen de Prima Media, el empleador o la compañía de seguros que asuma lo riesgos de invalidez, sobrevivencia y muerte, presentara reproche frente a la fecha de estructuración de la contingencia, su origen o el porcentaje de la PCL asignado;*

siendo del caso aclarar por la Sala que, en últimas, las controversias que se suscitan en relación con los dictámenes en firme, emitidos por los organismos calificadores, se dirimen por la justicia ordinaria (artículo 44 del Decreto 1352 de 2013).

En ese orden de ideas, el dictamen emitido por las juntas de calificación de invalidez no pueden ser prueba única, solemne o tarifada para determinar la pérdida de la capacidad laboral, pues tal y como lo ha reiterado el órgano jurisdiccional de cierre, el aludido dictamen “...no es más que un experticio que la ley estableció debía ser practicado por determinados entes, lo cual difiere claramente de lo que es una prueba solemne” (CSJ SL-24392 del 29-06-2005, SL31062 del 18-03-2009, SL-35097 del 06-03-2012, SL-351 del 15-05-2013, Radicado 37616, SL-5622 del 09-04-2014, Radicado 52072, y SL-42451 de 2016, SL-877 del 26-02-2020, Radicado 73738, SL-2756 del 29-07-2020, Radicado 72895); línea jurisprudencial en la que además se reiteró que “...al no estar en presencia de un medio probatorio solemne, al Juzgador de alzada le era permitido, conforme a la potestad de apreciar libremente la prueba, acoger aquellos elementos de convicción que le den mayor credibilidad o lo persuada mejor sobre cuál es la verdad real y no simplemente formal que resulte del proceso, en atención a lo previsto en el artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social”; precisando en las sentencias SL877 de 2020 y SL2568 de 2020 que, si el juez, para definir una determinada controversia, se ve enfrentado a dos dictámenes disímiles, **podrá escoger para fundamentar su decisión aquél que le merezca mayor credibilidad**, todo, se insiste, dentro del marco de libertad probatoria que le asiste de conformidad con los artículos 51, 54 y 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. -Negritas intencionales de la Sala-

De igual forma, la jurisprudencia laboral también ha sido pacífica y reiterativa al indicar que aunque los jueces del trabajo tienen plena competencia y aptitud para examinar los hechos que estructuran la invalidez calificada, a fin de resolver las controversias que los interesados formulen al respecto “Ello, por supuesto, no llega hasta reconocerle potestad al juez de dictaminar en forma definitiva, sin el apoyo de los conocedores de la materia, si el trabajador está realmente incapacitado o no y cuál es la etiología de su mal, como tampoco cuál es el grado de la invalidez, ni la distribución porcentual de las deficiencias, discapacidades y minusvalías” (SL-5280 del 31-01-2018, radicado 76993, SL-1044 del 20-03-2019, radicado 68074, y SL2349 del 28-04-2021, radicado 83859).

Desde esa perspectiva, al ponderar la Corte Suprema de Justicia las conclusiones de los dictámenes de pérdida de capacidad laboral, sostuvo que el juez “... debe comprender el tema probatorio, primero, desde el perfil científico que lo identifica y distingue, y luego interiorizarlo, arrojándolo con el manto jurídico y las consecuentes derivaciones, que provocará la sentencia, sin olvidar que la potencial relevancia de la prueba científica para esclarecer el hecho o para

establecer la convicción sobre la verdad del hecho, no es desde luego absoluta [...] No se le puede pedir al Juez que posea una sapiencia igual o superior a la del perito, por lo que el control de la prueba, debe realizarse mediante el análisis del grado de aceptabilidad de los conocimientos entregados o por la racionalidad del procedimiento y conclusiones, ponderando con cautela y guiándose por el esquema racional que le permitirá, a través de las reglas de la sana crítica, calibrar y establecer el mérito del medio persuasivo (CSJ SC-7817 del 15-06-2016, Radicado 11001310303420050030101).

2.3.2 Del Caso Concreto

Revisados entonces los medios de convicción que fueran arrimados al plenario, se tiene que el juzgador de primer grado postuló como argumento axial de la decisión opugnada, la dimensión y alcance de la fecha de estructuración del estado de invalidez, apoyándose en el dictamen emitido por la Facultad Nacional de Salud Pública Laboratorio de Salud Pública Área de Salud Ocupacional de la Universidad de Antioquia - UdeA, pericia en la que enfáticamente se descartó la idoneidad del concepto de médico de rehabilitación para establecer el estado de invalidez de un paciente, puesto que dicha noción corresponde únicamente a una “*definición del estado clínico del paciente para ese momento*”, acotando además que en dicho documento [e]l Dr Favio Alberto Henao Acevedo, describe; **“Paciente en programa de riesgo cardiovascular, Hipertensión arterial, “Diabetes(sic)” y epilepsia”**. Al respecto se considera que no está probado la diabetes, si no(sic) un estado de intolerancia a los carbohidratos con manejo solo dietario. La hipertensión sin angina tiene un porcentaje de deficiencia muy inferior al que le corresponde con el problema coronario, es por ello que, **para ese momento, estos diagnósticos junto a los trastornos osteomusculares de origen laboral o común, no son suficientes para un estado de invalidez acorde a la norma, solo se define tal condición cuando se comprueba de manera objetiva y se estadifica por parte del cardiólogo la Angina estable Clase III**”. -Negritas y subrayado intencional de la Sala-

Llegado a este punto, se impone recordar que el compendio normativo llamado a reglar la valoración probatoria de los dictámenes periciales, se encuentra entre otros, en el artículo 232 del CGP, el cual señala:

“Artículo 232. Apreciación del dictamen. El juez apreciará el dictamen de acuerdo con las reglas de la sana crítica, teniendo en cuenta la solidez, claridad, exhaustividad, precisión y calidad de sus fundamentos, la idoneidad del perito y su comportamiento en la audiencia, y las demás pruebas que obren en el proceso”.

Significa lo anterior que, el juicio de admisibilidad y aun el grado de convicción de la prueba pericial se encuentra determinada por la fiabilidad del ejercicio intelectual del experto, a la vez

de la verificación de la existencia de criterios racionales y un nexo coherente y suficiente entre la valoración y la conclusión a la que llegó aquel; aspectos éstos que se muestran robustos y consistentes en los dictámenes emitidos por las juntas calificadoras hoy demandadas. Ello, en atención a que dichos organismos en los dictámenes allegados, justificaron con la exhaustividad, precisión y rigurosidad que se reclama en los procesos de esta naturaleza, el origen de las patologías y la fecha de estructuración de la pérdida de capacidad laboral superior al 50% por las enfermedades de epilepsia, dolor crónico MSD y MII somático, hipertensión arterial con angina y artrosis de tobillo que padece el accionante, tomando, entre otros, como elementos demostrativos la historia clínica, la certificación de la primera oportunidad y los conceptos médicos que reposan en el cartulario, reiterando la JNCI que la fecha de estructuración corresponde al 28 de junio de 2016, en tanto en cuanto, es en esta data *“...donde el cardiólogo hace referencia a las secuelas funcionales claramente describiéndolas tal como se expresó previamente. Aunado a ello y al considerar que se está haciendo una calificación integral pero que son estas patologías las que mayor aportan a la calificación, encontramos acertada esta estructuración”* (pág.45, doc.03, carp.01).

Se sigue de lo anterior, que en lo que respecta a la fecha de estructuración de la enfermedad, la Sala coincide con el resultado de la valoración del dictamen de la JRCIA, la JNCI y de la UdeA, que la fijó el 28 de junio de 2016, fecha del diagnóstico de *“angina estable Canadian III, eco positiva para isquemia, HTA, epilepsia controlada ECG positivo para alteraciones de ondas agudas”*, factor determinante que demuestra el grado de afectación del estado de salud del actor, puesto que, *“[l]a angina aparece al andar 1 ó 2 manzanas o al subir un piso de escaleras), condición cardio vascular clasificada acorde a los criterios de severidad de la Canadian Cardiovascular Society (CCS), siendo esta la clasificación más comúnmente utilizada para medir la severidad de la angina, distinguiendo 4 clases (I, II, III y IV) en función de la limitación que ésta supone en la actividad cotidiana del paciente”*¹.

Con fundamento en lo anterior, la Sala subraya que, el artículo 3 del Decreto 1507 de 2014 define como fecha de estructuración aquella **“...en que una persona pierde un grado o porcentaje de su capacidad laboral u ocupacional, de cualquier origen, como consecuencia de una enfermedad o accidente, y que se determina con base en la evolución de las secuelas que han dejado estos.** Para el estado de invalidez, esta fecha debe ser determinada en el momento en el que la persona evaluada alcanza el cincuenta por ciento (50%) de pérdida de la capacidad laboral u ocupacional; la cual debe apoyarse **“...en la historia clínica, los exámenes clínicos y de ayuda diagnóstica y puede ser anterior o corresponder a la fecha de la declaratoria de la pérdida de la capacidad laboral. Para aquellos casos en los cuales no exista historia clínica, se debe apoyar en la historia**

¹ Dictamen pericial emitido por la UdeA (pág.17, doc.49, carp.01).

natural de la enfermedad. En todo caso, esta fecha debe estar argumentada por el calificador y consignada en la calificación. Además, no puede estar sujeta a que el solicitante haya estado laborando y cotizando al Sistema de Seguridad Social Integral

-Negritas y subrayado intencional de la Sala-

Por lo visto, es la fecha del diagnóstico de “*angina estable Canadian III, eco positiva para isquemia, HTA, epilepsia controlada ECG positivo para alteraciones de ondas agudas*” la que cumple con suficiencia con los elementos inmanentes al concepto de fecha de estructuración, resultando un argumento peregrino e infortunado el expuesto por el accionante en aras de ubicar la fecha de estructuración en la data en que fue proferido el concepto médico de rehabilitación, pues además de encontrarse tal pretensión desprovista de una ponderación técnico científica que la justifique, pretermite que el parte médico que defiende, se limita a relacionar las patologías que hasta ese momento padecía el señor MUÑOZ SERRANO, sin ocuparse de ponderar ni cuantificar el impacto de las mismas en la capacidad ocupacional del paciente ni los exámenes diagnósticos y demás pruebas técnicas analizadas de cara a la ocupación del promotor judicial, para siquiera inferir que la discapacidad, minusvalía y deficiencia se presentaron a partir del 17 de octubre de 2014²”.

Se insiste por la Corporación que, a pesar de que en la opugnación se alude de manera genérica a la existencia de literatura médica o conceptos clínicos que respaldan la tesis de los pedimentos formulados, su desarrollo es insuficiente, al no adunar al diligenciamiento judicial soporte acreditativo ni presentar argumentos sólidos, concretos y demostrativos en contra a lo inferido por el juzgador unipersonal de primer grado con apoyo en las disposiciones legales y doctrinales que rigen la materia. Ello se refuerza con las sentencias de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, v. gr., SL2991 de 2020 y SL3869 de 2021 donde se discurrió que, en derredor a derechos pensionales, “*la aplicación de la norma debe estar atada al principio de legalidad y no a la concepción de apreciaciones subjetivas y carentes de respaldo normativo*”.

Finalmente, con mayor incidencia en la desestimación de los ataques, exalta la Sala que la fecha de expedición del concepto médico de rehabilitación NO tiene ninguna relación con el hito cierto en que el señor MUÑOZ SARMIENTO efectivamente perdió su capacidad laboral, sino que, por el contrario, su expedición se ciñe a los términos previstos en los artículos 142 del Decreto 019 de 2012 y 2.2.3.2.2 del Decreto 780 del 2016, que responden al siguiente tenor: *[l]as Entidades Promotoras de Salud deberán emitir dicho concepto antes de cumplirse el día ciento veinte (120) de incapacidad temporal y enviarlo antes de cumplirse el día ciento*

² Nótese que el médico Fabio Alberto Henao en el concepto médico de rehabilitación (pág.08, doc.51, carp.01) se limitó a consignar de manera pura y simple los diagnósticos de las patologías que aquejaban al señor Ernesto de Jesús Muñoz Sarmiento.

cincuenta (150), a cada una de las Administradoras de Fondos de Pensiones donde se encuentre afiliado el trabajador a quien se le expida el concepto respectivo, según corresponda. Cuando la Entidad Promotora de Salud no expida el concepto favorable de rehabilitación, si a ello hubiere lugar, deberá pagar un subsidio equivalente a la respectiva incapacidad temporal después de los ciento ochenta (180) días iniciales con cargo a sus propios recursos, hasta cuando se emita el correspondiente concepto”; disposición abiertamente diferenciada de la noción de fecha de estructuración del estado de invalidez prevista en el canon 3 del Decreto 1507 de 2014 antes trasunto.

Corolario de lo expuesto, y atendiendo a las consideraciones fácticas, jurídicas y probatorias antes explicitadas, se dispondrá por la Sala la confirmación de la sentencia de primer grado, en cuanto desestimó *in totum* los pedimentos formulados por el señor ERNESTO DE JESÚS MUÑOZ SARMIENTO.

3. COSTAS

De conformidad con el amparo de pobreza³ que en los términos y para los efectos del artículo 154 del CGP le fuera concedido al señor ERNESTO DE JESÚS MUÑOZ SARMIENTO, no hay lugar a imponer a su cargo condena en costas.

En mérito de lo expuesto el **TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN, Sala Quinta de Decisión Laboral**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

4. RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 21 de marzo de 2023 por el Juzgado Veintiuno Laboral del Circuito de Medellín, dentro del proceso ORDINARIO LABORAL impulsado por ERNESTO DE JESÚS MUÑOZ SARMIENTO en contra de la JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DE ANTIOQUIA, la JUNTA NACIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ y la sociedad AFP PORVENIR S.A., en donde fue llamada como garante la aseguradora MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A., según y conforme lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.

SEGUDO: SIN COSTAS en esta instancia.


³ Auto del 02 de julio de 2019 (doc.06, carp.01).

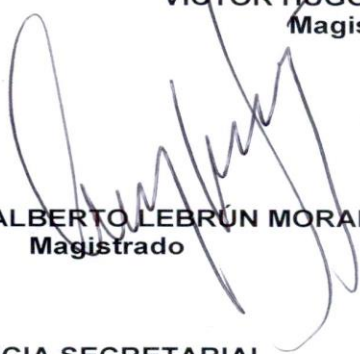
Lo resuelto se notifica mediante EDICTO, aplicando el criterio de la H. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, vertido en la reciente providencia AL2550-2021 del 23 de junio de 2021, M.P. Omar Ángel Mejía Amador.


Déjese copia digital de lo decidido en la Secretaría de la Sala y, previa su anotación en el registro respectivo, DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de origen.

Se declara así surtido el presente acto y en constancia se firma por los que en ella intervinieron.

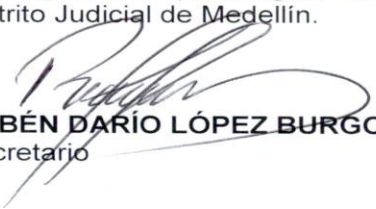
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE


VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO
Magistrado Ponente


CARLOS ALBERTO LEBRÓN MORALES
Magistrado


SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE
Magistrada

CONSTANCIA SECRETARIAL
Se deja constancia de que las anteriores firmas corresponden a las firmas originales de los magistrados que integran la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Medellín.


RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS
Secretario